



La respuesta del pueblo salvadoreño a los últimos procesos electorales celebrados en el país ha sido insistentemente interpretada como un voto mayoritario por la paz. Aun cuando estas interpretaciones reflejen más un interés propagandístico que un análisis objetivo, la explosión de gozo y aceptación popular que respaldó el inicio del diálogo en La Palma así como las diversas manifestaciones de las instituciones y organismos más diversos confirmarían el anhelo generalizado de la población salvadoreña por la paz. Resulta por ello tanto más doloroso comprobar cómo, independientemente de intenciones subjetivas o de declaraciones propagandísticas, el país se sigue sumergiendo cada vez más en la guerra civil.

El problema no radica, claro está, en que los contendientes no deseen la paz; el problema estriba en el tipo de paz que uno y otro consideran aceptable. Los principales actores de la contienda parecen estar convencidos de que todavía les es posible una victoria militar, de que el tiempo está de su lado y, por tanto, de que la prolongación de la guerra favorece su objetivo de obtener una paz que les sea totalmente ventajosa. Por ello, siguen poniendo el máximo de su esfuerzo en la profundización de la confrontación militar en lugar de propiciar aquellos pasos que abrirían el espacio sociopolítico necesario para poner fin a la guerra y empezar a construir la paz.

Lo menos que se puede decir tras cinco años de guerra civil es que se está tan lejos o más que al principio de una victoria militar por alguna de las dos partes y que, aun en el supuesto iluso de que esa victoria fuera posible, los costos económicos, humanos y sociales serían de tal magnitud, que harían de esa victoria un logro pírrico y, por su propia naturaleza, fugaz. Es urgente, por tanto, encontrar un camino distinto hacia la paz, un camino que represente una alternativa válida a la confrontación militar cuya ineficacia pacificadora sólo es comparable a su eficacia destructiva.

Pero encontrar ese camino no es simple asunto de buenas voluntades o de irenismos idealista; ese camino requiere tomar conciencia de las raíces mediatas e inmediatas del conflicto, de las fuerzas sociales involucradas y de todos aquellos intereses objetivos que, con razón o sin ella, pueden bloquear el logro de la paz. De ahí la necesidad de establecer un diagnóstico lo más certero posible para, a partir de ahí, delinear los pasos necesarios para construir una verdadera paz social.

## 1. LA GUERRA CIVIL.

### 1.1. Causas de la guerra.

Aunque las raíces últimas de la guerra han sido señaladas en numerosas ocasiones, no está de más recordarlas ya que cierta propaganda masiva tiende a ocultarlas o, por lo menos, a restarles importancia.

1.1.1. La causa última y fundamental la constituye un *sistema socioeconómico tan injustamente estructurado* que, mientras permite a unos pocos la sobreacumulación de bienes, mantiene a la mayoría de la población en un estado de indigencia deshumanizante (CUDI, 1982; Rosenthal, 1982; Sevilla, 1984; ver, también, Montgomery, 1982). Hay que repetir, por más que les duela a algunos, que el sistema económico imperante en el país ha sido incapaz a lo largo de toda su historia de satisfacer una tan sola de las necesidades básicas de la mayoría de la población salvadoreña. alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo (Armstrong y Rubin, 1983; White, 1983). En ese sentido, no cabe pensar que el pueblo salvadoreño, incluso en los momentos más duros de la contienda actual, tenga algo así como un paraíso perdido al que volver la mirada.

En la década de los años sesenta, y al calor del optimismo kennediano, se pudo pensar que la industrialización del país y el Mercado Común Centroamericano permitirían superar el estado de subdesarrollo y proporcionar a las mayorías una respuesta mínima a sus necesidades básicas, encauzando así a la sociedad salvadoreña por la vía de un progreso socioeconómico equilibrado y pacífico. Sin embargo, la llamada "guerra del fútbol" en 1969 (Anderson, 1984) señaló la ruptura del cántaro de los sueños desarrollistas, poniendo de manifiesto que mal podía darse un crecimiento integral allí donde las raíces mismas de la organización social estaban viciadas. El regreso masivo de los salvadoreños deportados de Honduras trajo a la conciencia nacional la necesidad de urgentes cambios sociales, empezando con una reforma agraria que respondiera a las necesidades de la población mayoritaria y más desamparada del país, el campesinado (Sebastián, 1970).

1.1.2. La segunda causa profunda de la guerra civil hay que buscarla en la *inflexibilidad institucional frente al cambio* (ver Torres Rivas, 1981). Una y otra vez, los intentos pacíficos por lograr cambios sociales incluso mínimos han encontrado no sólo la cerrazón más obcecada por parte de quienes detentaban el poder económico y político, sino que incluso han abocado a la represión sangrienta de quienes osaron promoverlos. Los sucesivos intentos fallidos por

\* Docente e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador-El Salvador.

\*\* Ponencia presentada en el foro "Alternativas para la paz". San Salvador, 28 de septiembre de 1985.

---

introducir algún tipo de reforma agraria o los reiterados fraudes ante los triunfos electorales de la oposición política constituyen ejemplos muy concretos y recientes de cómo el sistema salvadoreño cerró siempre la vía pacífica a los cambios sociales (ver, por ejemplo, Hernández-Pico y otros, 1972).

1.1.3. La tercera causa profunda de la guerra estriba en una profunda *crisis político-ideológica* del régimen salvadoreño en la década de los setenta (Guidos Véjar, 1979). Esta crisis incluye la deslegitimación del *status quo* por parte de la Iglesia, cuyos sectores más significativos entran en abierto conflicto con el poder establecido. La población salvadoreña se moviliza a través de organizaciones de todo tipo, las más de ellas al margen de la ley y en desafío a las instituciones legales. La respuesta del régimen a esta creciente movilización popular es una ola masiva de represión que convierte a El Salvador en uno de los violadores mayores de los derechos humanos y le acarrea importantes condenas internacionales (Informe, 1979). La toma del poder por el sandinismo, en julio de 1979, precipita el golpe de estado de los militares jóvenes que pretenden evitar que en El Salvador se produzca un colapso institucional semejante al de Nicaragua. El rápido fracaso de este esfuerzo reformista más el desarrollo de una pavorosa campaña de terror oficialista contra las organizaciones populares que sólo en 1980 se cobra no menos de 8 400 víctimas, no deja más alternativa a la crisis, estructural y coyuntural, que la guerra. La formalización del conflicto tiene lugar el 10 de enero de 1981 (Martín-Baró, 1981).

## 1.2 Redefinición geopolítica del conflicto.

Aun cuando las raíces fundamentales del conflicto son de orden interno, es claro que Estados Unidos no iba a permanecer imparcial frente a un problema en lo que consideraba su "patio trasero". Lo que para los salvadoreños constituía un problema de justicia y libertad, Estados Unidos lo vió desde la perspectiva de su "seguridad nacional" y, por lo tanto, en el contexto de su particular confrontación con la Unión Soviética por la hegemonía mundial (Insulza, 1982). Así, ante el peligro de que la ofensiva insurgente derribara al gobierno salvadoreño, el gobierno de Estados Unidos decidió proporcionarle su ayuda militar, con la disculpa de que había habido un desembarco de mercenarios procedentes "de un cercano país" (ver Martín-Baró, 1981). Lo de menos era la patente falsedad del desembarco; lo de más era que Estado Unidos, con una administración poco escrupulosa frente a las violaciones a los derechos humanos y obsesionada por la confrontación anticomunista, tomaba el proceso en sus manos y hacía del caso salvadoreño la línea de contención del "avance soviético". Lo que era un conflicto interno se convertía así en parte de la confrontación Este-Oeste.

Desde ese momento, es claro que la fuerza principal en el conflicto salvadoreño lo ha constituido la Embajada norteamericana. La Administración Reagan ha definido un proyecto político para El Salvador cuyo objetivo fundamental es la aniquilación de todo rastro de insurgencia y que sólo secundariamente se interesa por las condiciones de miseria, explotación e injusticia que desencadenan el conflicto. Por ello, el énfasis norteamericano ha estado y sigue estando en la ayuda militar, en los planes de contrainsurgencia, en cuyo contexto se mide el valor de las otras políticas, económicas o sociales (Bermúdez, 1985; Bermúdez y Córdova, 1985).

Así, al examinar el conflicto salvadoreño, hay que distinguir por lo menos dos niveles de confrontación: por un lado, la confrontación principal entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas insurgentes; pero, por otro lado, la contradicción secundaria que se da entre el proyecto político oligárquico, el proyecto reformista de la Democracia Cristiana y el proyecto de "seguridad nacional" de los Estados Unidos (ver Partidos, 1984). Hoy por hoy, la Democracia Cristiana se ha convertido en el gerente del proyecto norteamericano para El Salvador; sin embargo, no parece adecuado identificar totalmente sus respectivos proyectos para el país ni se puede ignorar que, bajo ciertos aspectos, la Administración Reagan tiene más coincidencias ideológicas con la perspectiva oligárquica que con la perspectiva democristiana.

## 1.3. Los términos actuales del conflicto.

Podemos caracterizar con cuatro rasgos la situación actual de la guerra civil en El Salvador: (a) el escalonamiento militar; (b) el agravamiento de las condiciones socio-económicas; (c) el desquiciamiento socio-político; y (d) la pérdida de la soberanía.

(a) La nota más definitiva sobre la actual situación de El Salvador es, sin lugar a dudas, la **continua profundización de la confrontación militar**. Si en 1979 el ejército salvadoreño contaba apenas con 15 000 hombres y unos 350 oficiales, en estos momentos dispone ya de 50 000 hombres y unos 2 300 oficiales, sin contar 15 000 miembros adicionales

---

de los cuerpos de seguridad. Este crecimiento vertiginoso apenas ha sido suficiente para manejar la cantidad de armas de todo tipo con que Estados Unidos ha saturado al país, pero ha permitido a la Fuerza Armada multiplicar cuantitativa y cualitativamente sus operativos de contrainsurgencia, cuya capacidad destructiva es cada vez mayor (Valoraciones, 1985). Por su parte, el FMLN mantiene un ejército, probablemente no inferior a los 10 000 combatientes, buena parte de ellos con una gran experiencia en la lucha. No parece acertado suponer que el FMLN se encuentre en un estado de desmoralización creciente, sin que eso signifique negar las bajas y deserciones que le ha ocasionado la guerra aérea o la necesidad de cambiar su táctica militar. Es posible que ya no pueda desarrollar ataques espectaculares con grandes unidades, como los que realizó a finales de 1983; pero día a día está demostrando que la nueva táctica de operar en unidades pequeñas le permite extender su campo de acción a toda la república y mantener una campaña de atrición contra objetivos militares y económicos sumamente efectiva (Villalobos, 1985; Balance, 1985). No es éste el lugar para un análisis detallado sobre la marcha de la guerra, pero si es necesario subrayar que, lejos de disminuir, el accionar militar va en crecimiento y que cada vez es mayor el estrago que causa tanto en vidas humanas como en propiedad destruida.

(b) La segunda gran característica de la presente situación del país es el agravamiento de la situación socio-económica (Argueta, 1984; Ibisate, 1985). La acelerada devaluación del colón que estamos experimentando en estos días no es más que un reflejo del deterioro generalizado en las condiciones económicas del país a lo largo de la guerra. Según estimados más bien conservadores, el país habría retrocedido económicamente a los niveles de 1960 y, en el mejor de los casos y con todos los factores favorables, a finales de siglo estaríamos recuperando los niveles de 1979. Claro que para entonces el problema se habrá agudizado pues, entre otras cosas, en lugar de alimentar a cinco millones habrá que alimentar a diez millones de salvadoreños. Si datos oficiales reconocen un desempleo abierto del 35% de la PEA y un subempleo o desempleo encubierto no menor a un 20% adicional, ¿qué futuro laboral espera a las nuevas generaciones de salvadoreños? Y lo trágico es que, ante una economía tan deteriorada, casi el sesenta por ciento del presupuesto nacional se destina a gastos directa o indirectamente relacionados con la guerra, es decir, se emplee en la destrucción del país, ello sin contar el presupuesto paralelo de la ayuda norteamericana. Que, en un país como El Salvador, la guerra se esté comiendo entre uno y dos millones de dólares diarios, no puede considerarse más que como una aberración histórica. Nada de extrañar, entonces, que, a pesar del intento por mantener vivo en la población el terror hacia la represión, vuelven a rebrotar por todas partes los movimientos de protesta popular, de reivindicación laboral, de inconformismo social.

(c) Como obvio correlato de la confrontación militar se da en el país un total descoyuntamiento social. Este descoyuntamiento tiene múltiples aspectos que aquí sólo podemos indicar. Está, ante todo, la polarización generalizada, es decir, la división de la población en posturas tan divergentes que hacen inviable una convivencia social constructiva. La polarización constituye un fenómeno psicosocial y, en cuanto tal, propio de la conciencia colectiva (Martín-Baró, 1983); pero echa sus raíces en los intereses objetivos que definen la lucha de clases, lo que hace más difícil su superación. Está, además, el gravísimo deterioro institucional, del que la inoperancia y corrupción del sistema judicial es quizás el ejemplo más obvio y preocupante. Y como un factor que agrava todo el panorama social se encuentra la población desplazada por la violencia, que según estimados recientes supera ya al 20% de la población total (Instituto, 1985).

(d) Finalmente, la situación actual de El Salvador se caracteriza por la creciente pérdida de la soberanía nacional (Seis tareas, 1985). Es claro que el país sobrevive por la continua infusión de dólares desde Washington, que en el último año fiscal equivalió a un presupuesto paralelo al de la nación. Ahora bien, sería ingenuo pensar que Estados Unidos nos alimente económicamente sin exigir contrapartida; y la contrapartida, claro está, estriba en la aceptación de sus puntos de vista y en la defensa, nacional e internacional de sus intereses. La cosa es todavía más grave en el ámbito militar, donde son los asesores norteamericanos los que definen las grandes líneas de la guerra cuando no también las "líneas pequeñas". Incluso en los momentos actuales, en los que indudablemente la Fuerza Armada ha progresado en todos los sentidos, es difícil pensar que no sería derrotada por el FMLN en el caso de que Estados Unidos le retirara toda su ayuda. Pero si la dependencia es grande en lo económico y en lo militar, es casi total en lo político, por lo menos, en lo que concierne a las grandes decisiones. Nadie ignora que fue Estados Unidos quien impuso las primeras elecciones a Asamblea Constituyente, o quien exigió que el presidente no fuera el Mayor Roberto D'Aubuisson, sino el Dr. Alvaro Magaña (ver Las elecciones, 1982). De hecho, Estados Unidos constituye el principal apoyo de que dispone el gobierno del Ing. Duarte para mantenerse en el poder, ya que en este país los votos no significan poder, y mal podría sobrevivir de otra manera un gobierno que no cuenta con la simpatía mayoritaria ni del capital ni de la Fuerza Armada. Es claro que en el país, por encima del gobierno de Duarte está el supragobierno de Reagan y que, por consiguiente, a la hora de decidir la política de El Salvador, cuentan más las preocupaciones del Congreso norteamericano que las necesidades del pueblo salvadoreño (Grave, 1985). Esto no quita, por supuesto, el margen de autonomía que en su

---

quehacer tenga el Ing. Duarte; lo que se afirma es que, objetivamente, este margen se ha reducido cada vez más hasta el punto de convertir al actual gobierno de El Salvador en un servidor obsecuente a los más mínimos deseos expresados por la Administración Reagan. Quizá la consecuencia más grave de esta pérdida de soberanía estriba en que, para satisfacer las demandas norteamericanas, se pone el énfasis en la imagen más que en la realidad, y se buscan soluciones aparentes que, en lugar de contribuir a resolver los graves problemas nacionales, tienden a agravarlos.

## 2. LA BUSQUEDA DE LA PAZ.

### 2.1. Presupuestos.

Para lograr una auténtica paz en el país es necesario partir de una serie de presupuestos, sin los cuales todo esfuerzo correrá el peligro de ser dilapidado y hasta de quemar posibilidades.

(a) Hay que establecer una clara distinción entre la paz como ausencia de guerra y la paz como estado de concordia social generado por una situación de justicia fundamental. En este sentido, aunque la tarea más urgente es buscar una salida a la guerra, sin la cual no se podrá empezar a trabajar por la paz, el quehacer más necesario es el establecimiento de unas estructuras sociales de justicia. De nada serviría poner fin a la confrontación bélica si no se van adoptando aquellas medidas de mediano y largo plazo que garanticen la justa satisfacción de las necesidades básicas a toda la población salvadoreña. Y esto representa un problema tanto de desarrollo como de distribución.

(b) Hace falta que todos los sectores sociales tomen conciencia de aquellos intereses que son comunes y que se sitúan incluso más allá de la diferencia de clases. De nada serviría que cualquiera de las partes ganara la guerra si ello supusiera la destrucción completa del país o si requiriera el abdicar de la propia independencia y soberanía como pueblo. De ahí la necesidad perentoria de que todas aquellas instancias que moldean la opinión pública, en lugar de profundizar las diferencias a base de estereotipos belicistas, promovieron el respeto mutuo entre los rivales, la racionalidad en el tratamiento de los procesos y un espíritu de verdadero nacionalismo.

(c) El criterio fundamental en la búsqueda de la paz debe ser siempre el interés del pueblo salvadoreño, aquello que más beneficia a las mayorías populares, y no los intereses parciales de un partido, grupo o institución por importantes o representativos que sean. La absolutización de la propia perspectiva e intereses partidistas termina por ignorar o dar la espalda al bien común del pueblo.

(d) Tanto la salida de la guerra como la construcción de la paz requieren ir poniendo pasos, pequeños en un primer momento, pero no por ello menos importantes. Las posturas absolutistas del "todo o nada" conducen a la inflexibilidad y hacen perder oportunidades excelentes para dar pasos hacia adelante.

(e) Es necesario tomar en cuenta a todas las fuerzas e intereses involucrados en el conflicto, por lo menos los más importantes. Si algo ha demostrado el conflicto es que la composición social de El Salvador es más compleja de lo que se solía creer y, por tanto, que no se debe forzar soluciones que ignoren a amplios sectores de la población.

(f) Finalmente, es posible que la solución que se vaya encontrando sea deficiente y resulte parcialmente insatisfactoria para todas y cada una de las partes involucradas en el conflicto. Sin embargo, frente a la opinión norteamericana sobre Centroamérica de que es mejor un colapso del proceso de paz que un "mal acuerdo" ("malo" para el gobierno de los Estados Unidos, se entiende), nosotros nos adherimos a la opinión latinoamericana del grupo de Contadora de que es mucho mejor, sobre todo para el pueblo salvadoreño, un mal acuerdo de paz que una buena guerra.

### 2.2. Pasos hacia la paz.

#### 2.2.1. La humanización de la guerra.

El primer paso hacia el fin de la guerra requiere un mínimo de dignidad en la conducción de la misma guerra. Hay que insistir, por tanto, en la necesidad de humanizar la guerra, por más contradictorio que pueda parecer este término. Es indudable que algo se ha avanzado en el trato que se concede a los combatientes que caen prisioneros de guerra, aunque el gobierno obviamente no quiera reconocerlos como tales. Sin embargo, todavía se dan con demasiada frecuencia casos de tortura, de desaparición y aun de simple asesinato en contradicción con los convenios internacionales, lo que permite pensar que hay mucho por progresar en esta área.

---

Todavía mucho más hay que avanzar en el respeto total a la población civil, independientemente de sus simpatías políticas. Hay que poner fin a toda forma de terrorismo, entendiendo por tal todas aquellas prácticas violentas ejercidas sobre la población no combatiente que buscan someterla a los propios intereses o manipularla en función de los propios objetivos mediante la práctica del terror. Terroristas son, sí, los secuestros de civiles (cualquiera sea su ideología política), pero también los bombardeos sobre poblaciones no combatientes o el hostigamiento brutal y sistemático a los grupos y personas en su vida cotidiana. De hecho, el mayor número de muertes violentas ocurridas en 1984 pertenece a la población civil, como consecuencia de los operativos de la Fuerza Armada y de los bombardeos indiscriminados sobre zonas habitadas por presuntos simpatizantes de la guerrilla (Tutela, 1985).

Podría y debería pensarse también en una reducción paulatina pero firme de la guerra y de la forma de llevarla a cabo. Sería un gran paso adelante que, en lugar de ir introduciendo armas cada vez más poderosas y destructivas, se pusiera un límite a la armamentización; la escalada armamentista no está decidiendo la guerra, pero sí está aumentando el número de sus víctimas y la gravedad de los destrozos. Sería importante, también, aceptar la existencia de terrenos neutrales, zonas respetadas por ambas partes, donde las personas pudiesen estar realmente a salvo de los embates bélicos de todo tipo. Otro tanto cabría decir de lugares particulares, como hospitales o escuelas, que deberían ser absolutamente respetados. En todos estos aspectos, mucho, muchísimo podría avanzarse como parte de la humanización de la guerra.

Pero si es necesario humanizar la guerra "formal", es absolutamente imperativo terminar con toda forma de "guerra sucia", es decir, con la violación sistemática a algunos de los derechos humanos más básicos de la población salvadoreña. Es cierto que ha habido una disminución significativa en el número de víctimas de los "escuadrones de la muerte", particularmente en el área metropolitana de San Salvador; pero todavía el año pasado pudieron contabilizarse no menos de 3 000 víctimas de la represión política, es decir, casi siete asesinatos por día, lo que difícilmente se presta a hablar de mejoría (Tutela, 1985). Más aún, periódicamente se observa que, en los momentos en que la situación política o laboral vuelve a ponerse tensa, reaparecen los fatídicos "escuadrones", con su habitual impunidad (Roedzni, 1985).

Es urgente dismantelar todas las estructuras de terrorismo represivo así como su cobertura y respaldo legal. Mientras no se haya desmontado el aparato represivo, mientras no se hayan desintegrado todos y cada uno de los "escuadrones de la muerte" y llevado a sus miembros ante la justicia, no sólo no hay forma de garantizar la posibilidad de la convivencia, sino que se estará siempre al arbitrio de quienes tienen el poder de la violencia y lo han podido emplear en forma impune siempre que les ha convenido. Es posible que esto tome algún tiempo; pero, fuera de los ejecutores directos de las religiosas norteamericanas, caso exigido por los intereses norteamericanos, está todavía por ver a algún responsable de las múltiples y gravísimas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en este país durante los últimos años obligado a responder ante la justicia por sus delitos. El proceso actual que se sigue en Argentina es aleccionador y debería ser tomado como modelo.

Por lo dicho, es evidente que la humanización de la guerra requiere con urgencia el establecimiento de un sistema de justicia operante e independiente. Poca garantía hay de estabilidad en el respeto a los derechos humanos mientras ello quede a la voluntad de los responsables, sin que exista una instancia superior frente a la cual todos deban rendir cuentas. En este sentido, es imperativo que ninguna institución puede situarse en la práctica por encima de la ley; mientras esto sea así —y el pueblo salvadoreño bien sabe que, hoy por hoy, eso es así—, el respeto a los derechos humanos en El Salvador no pasará de ser "papel mojado".

### *2.2.2. El diálogo.*

La segunda gran serie de pasos que hay que dar hacia el logro de la paz concierne al establecimiento de un diálogo entre las partes en conflicto. El diálogo no es ningún fin en sí mismo, sino un medio, pero un medio sin el cual, como no hace mucho volvía a señalar la Conferencia Episcopal de El Salvador, no habría otra alternativa que la continuación indefinida de la guerra (CEDES, 1985). En algún momento pretendió venderse la idea de que las elecciones constituirían el verdadero diálogo, la salida a la guerra (ver Comisión Kissinger, 1984, págs. 145-151; Schwartz y Cuenca, 1982); pero hemos vivido cuatro procesos electorales sucesivos, cada cual de ellos jaleado más triunfalmente, y la guerra, lejos de amainar, ha seguido extendiéndose y profundizándose. Lo menos que podría decirse a estas alturas es que ni la confrontación militar ni los procesos electorales han podido traer la paz al país; hace falta, por tanto, probar otros medios, buscar otros caminos, en los cuales se involucre a todas las partes contendientes. Y mal se puede pensar en algo así si primero no se da alguna forma de diálogo y de negociación.

---

Tras un comienzo espectacular y esperanzador, el diálogo ha entrado en una vía muerta (Campos, 1984). Las razones para ello son muy diversas: probablemente el Ing. Duarte ha sentido que su gobierno no disponía de fuerza suficiente como para entrar en un proceso al que se oponen sectores importantes tanto del capital como de la Fuerza Armada; pero de fondo está el objetivo primordial del proyecto norteamericano que pretende la aniquilación total del movimiento revolucionario, y la convicción de la Administración Reagan de que la victoria militar es una simple cuestión de más dólares, más armas y más tiempo. De esta manera, se llega a la lamentable situación en la que no sólo se evita el progreso del diálogo, sino que hasta se utiliza como un pretexto para proseguir y profundizar la guerra. Tampoco los insurgentes han mostrado un exceso de celo por llegar al diálogo; y es que cuando se está convencido de que la prolongación de la guerra favorece la propia postura, no se siente la urgencia de sentarse a la mesa de la negociación. Pero éste es un planteamiento que mira únicamente al interés de la parte interesada, no al interés del pueblo salvadoreño tomado en su conjunto.

El diálogo deberá darse entre los contendientes principales y tendrá que abordar aquellos pasos que permitan poner fin a la guerra y establecer las condiciones mínimas para empezar a construir la paz. Los puntos de humanización de la guerra que se han mencionado antes u otros equivalentes bien pueden servir como materia inicial de discusión, ya que, sobre ellos, no parece excesivamente difícil lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes pero, sobre todo, para el pueblo salvadoreño. Eso no quiere decir que estos acuerdos iniciales no deban lograrse en el marco de un examen global del conflicto, que es en definitiva lo que cuenta; pero tanto más fácil resultará abordar los problemas más espinosos cuantos más peldaños se hayan ascendido anteriormente por la difícil rampa del entendimiento y del respeto mutuos. Es seguro, además, que el beneficio que esos acuerdos aporten a la población revertirá sobre los contendientes como un referendun popular en favor de la paz. Frente al imperativo histórico del diálogo, el que las conversaciones tengan lugar dentro o fuera del país parece un aspecto secundario que sólo puede servir como disculpa cuando no hay voluntad de negociación.

Junto al diálogo de los contendientes principales debe darse un diálogo generalizado entre las fuerzas sociales más representativas del país. Si se ha dicho que la guerra es un asunto demasiado serio como para dejárselo sólo a los militares, hay que afirmar que la paz es un objetivo demasiado importante como para confiarlo únicamente en las manos de los políticos. Los objetivos de este diálogo nacional tienen que ser por lo menos dos: la despolarización social y la elaboración paulatina de un proyecto nacional.

En primer lugar, se trata de revertir la dinámica polarizadora que divide a los salvadoreños en grupos opuestos y cerrados; sólo quienes saben que no tienen la razón o quienes confían más en la violencia que en la inteligencia se cierran al diálogo. El diálogo permitirá romper muchos malentendidos mutuos y, sobre todo, muchos estereotipos simplistas que llevan a ver la realidad dividida en "nosotros, los buenos" y "ellos, los malos".

En segundo lugar, deben irse buscando grandes líneas de acuerdo para la orientación del país, ya que antes o después habrá que lograr un proyecto nacional que permita un consenso colectivo, un nuevo "contrato social". Es urgente, por tanto, reflexionar sobre las exigencias inaplazables de un desarrollo económico, de unas estructuras de justicia, de unas formas de convivencia aceptables para todos o, por lo menos, para aquellos que estén dispuestos a anteponer el bien común sobre el bien individual, las necesidades básicas de la colectividad sobre los gustos suntuarios de la minoría. No sólo resulta preocupante el abismo en que nos ha sumergido este proceso que ha culminado con la guerra civil; resulta todavía más preocupante la ausencia real de un proyecto de nación, de un verdadero programa que contemple en forma operativa la manera como se piensa dar respuesta a los gravísimos problemas de miseria de quienes en pocos años constituiremos una población de diez millones de personas.

### *2.2.3. Activación económica.*

De continuar la dinámica actual de la guerra, el país se encauza hacia un deterioro de sus estructuras económicas de tal magnitud que el daño resultará irreparable. Seguir invirtiendo la mayor parte de los recursos del país en su destrucción constituye una verdadera locura; y pensar que quienes hoy se muestran tan generosos para defender su "seguridad nacional", una vez terminada la guerra seguirán mostrando una generosidad similar para propiciar nuestro desarrollo y bienestar social, constituye una ingenuidad política. Por ello hay que poner fin a la guerra cuanto antes, y dedicar nuestra inteligencia y nuestras manos a producir techo y alimento, salud y educación para todos los salvadoreños.

Sin embargo, hay algunas medidas socioeconómicas que deberían irse propiciando desde ahora. Una de ellas, no por obvia menos importante, consiste en repartir equitativamente los costos de la guerra. Hasta ahora, la carga de las exigen-

---

cias bélicas ha pesado principalmente sobre las espaldas de los sectores más humildes de la población, que han visto cercenados sus salarios, desminuida su capacidad adquisitiva, deteriorado su nivel de vida, mientras unos pocos (los de siempre) han conseguido incluso negocios más lucrativos y han vivido de espaldas a las penalidades de la guerra. Es indudable que los recortes en los ingresos familiares de los sectores bajos supone un deterioro en la satisfacción de las necesidades fundamentales, mientras que esos mismos recortes en los ingresos de los sectores altos tan sólo requeriría la adopción de un estilo más modesto de vida. Como ejemplo de una situación de grave injuria objetiva al pueblo salvadoreño está la de aquellos funcionarios que se asignan salarios suntuosos, por encima de los 10 000 y aun de los 20 000 colones, por administrar ayudas internacionales, incluso humanitarias. Los costos económicos de la guerra deben repartirse en forma equitativa, de tal manera que todos los sectores sin excepción sientan la tragedia que representa y el nacionalismo sea así algo más que un "slogan" ideológico.

Vinculado con lo anterior está el problema del desempleo. Es perentorio crear fuentes de trabajo que disminuyan esa abrumadora tasa de desempleo superior a la mitad de la población irónicamente llamada "económicamente activa". Si la empresa privada se muestra incapaz por la razón que sea de generar puestos de trabajo, el Estado tiene la grave obligación de atender directamente este problema. En este sentido, no sólo hay que llevar adelante las reformas estructurales iniciadas, sobre todo la Reforma Agraria, sino que hay que reconsiderar las tecnologías que se están aplicando en el país; una tecnología más avanzada no es por lo mismo una tecnología mejor, si de lo que se trata es de ayudar al desarrollo socioeconómico de la población y no de generar sustanciosos lucros para unos pocos. Todos los datos parecen indicar que el actual gobierno ha estado más atento a satisfacer las demandas económicas de los grupos adinerados que las necesidades de las mayorías. Esta prioridad, indirectamente reconocida en varios discursos oficiales y directamente por los hechos, debe revertirse.

Un grupo humano que requiere especial atención de cara al presente y, sobre todo, al futuro económico del país es el de la población desplazada. Por un lado, hay que prestar una atención urgente y generosa a este grupo, víctima principal de la guerra, y ello sin distinción de simpatías o vinculaciones políticas. Pero, por otro lado, hay que empezar a planificar desde ahora su reintegración al resto de la población, no sólo en función de exigencias humanas, sino también a la luz de las posibilidades económicas locales y regionales. No se puede dejar que este proceso se produzca espontáneamente, ya que ello sólo precipitaría el incremento acelerado de los sectores marginados en las principales ciudades del país, sobre todo en el área de San Salvador.

#### *2.2.4. Recuperación de la soberanía nacional.*

Si se quiere avanzar seriamente en la construcción de la paz hay que recuperar la soberanía nacional. De hecho, la prolongación de la guerra ha llevado a una dependencia en todos los órdenes de Estados Unidos, dependencia que ha convertido a El Salvador en un peón de la política norteamericana. Y esto constituye una hipoteca que, de no redimirse cuanto antes, va a bloquear cualquier proyecto de paz para el país.

La recuperación de la soberanía requiere, ante todo, aceptar como punto de partida que los intereses salvadoreños no tienen por qué coincidir con los intereses norteamericanos y, por tanto, que lo que quizá sea bueno para los Estados Unidos no tiene por qué serlo para El Salvador. El proceso de paz centroamericano promovido por el grupo de Contadora es el caso más expresivo a este respecto. A la Administración Reagan puede convenirle mantener desestabilizada el área, en tanto logra la caída del actual gobierno nicaragüense y aniquila militarmente al movimiento revolucionario en El Salvador; sin embargo, al pueblo salvadoreño le resulta mucho más necesario el establecimiento urgente de un tratado de paz que le permita confrontar sus propios problemas de desarrollo y justicia. La política servil observada, avalando la oposición de hecho del gobierno norteamericano respecto a Contadora, en nada ha beneficiado el proceso de paz ni los intereses de El Salvador.

De cara al propio país, la recuperación de la soberanía requiere una verdadera democratización. Sólo en la medida en que el pueblo salvadoreño cuente con los mecanismos adecuados para hacer presente su opinión y sus intereses en la dirección de los asuntos del Estado, podrá considerarse dueño de su propio destino y resistir a las presiones de intereses ajenos. En este sentido, el voto constituye a todas luces un mecanismo insuficiente tanto para el pueblo, que no ejerce de hecho ningún control sobre la política, como para el gobierno, que carece de poder real para responder a las necesidades y demandas populares. Mientras el gobierno sólo cuente con el poder moral que le otorga el voto popular, estará a merced de quien, aun sin razón moral, cuenta con el dinero y las armas para imponer sus opciones. De ahí que la recuperación de la soberanía nacional pase por la participación real, y no filtrada, de los intereses populares en la conducción de la política salvadoreña. Frente a lo que parece ser la actual política de hecho, en el desarrollo del movimiento

gremial y sindical, no en su represión o mediatización partidista, estriba el futuro de la democracia en el país y, por consiguiente, la posibilidad de recuperar su soberanía.

No existen fórmulas prefabricadas sobre cómo superar un conflicto de la profundidad y complejidad del salvadoreño. Las cuatro líneas señaladas —humanización de la guerra, diálogo, activación económica, recuperación de la soberanía nacional— constituyen orientaciones fundamentales y no un recetario. Sin embargo, ponen de relieve la posibilidad de ir dando pasos hacia el fin de la guerra y la construcción de la paz. Estos pasos son responsabilidad en parte de las fuerzas representadas en el gobierno y de las fuerzas insurgentes del FDR-FMLN; pero son también responsabilidad de todos nosotros. Ciertamente, debemos presionar a las fuerzas contendientes para que, cuanto antes, se embarquen en el camino de la paz. Pero, entre tanto, no podemos permanecer pasivos, mano sobre mano; debemos ponernos en marcha. Porque, el que alguien no cumpla con su parte, no nos exime a los demás de nuestra propia responsabilidad histórica.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Anderson, Thomas P. (1984). *La guerra de los desposeídos. Honduras y El Salvador, 1969*. (Traducción de Marina A. Contreras.) San Salvador: UCA Editores.
- Argueta Antillón, Luis. (1985). La economía de El Salvador en 1984. Algunos elementos de análisis. *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales* (UCA, San Salvador), 8, 7-29.
- Armstrong, Robert y Janet S. Rubin. (1983). *El Salvador: el rostro de la revolución*. (Traducción de Joaquín Samayoa.) San Salvador: UCA Editores.
- Balance Militar. (1985). *Proceso* (UCA, San Salvador), 205, 23 de septiembre de 1985.
- Bermúdez, Lilia. (1985). Centroamérica: la militarización en cifras. *Cuaderno de trabajo del CINAS*, 4, 5-34.
- Bermúdez, Lilia y Ricardo Córdova. (1985). Estados Unidos: Centroamérica, cuatro años de intervención militar (1981-1984) *Cuaderno de trabajo del CINAS*, 4, 5-34.
- Campos, Tomás R. (1984). Las primeras vicisitudes del diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR. *ECA*, 434, 885-903.
- CEDES (Conferencia Episcopal de El Salvador). (1985). *Reconciliación y paz*. Carta pastoral. San Salvador, 6 de agosto de 1985. (Mimeo.)
- Comisión Kissinger. (1984). *Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica*. México: Ed. Diana.
- CUDI. (1982). *La economía salvadoreña 1981-1982*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- Grave preocupación tras el primer año de la presidencia de Duarte. (1985). *ECA*, 439-440, 325-344.
- Guidos Véjar, Rafael. (1979). La crisis política en El Salvador 1976-1979. *ECA*, 369-370, 507-526.
- Hernández Pico, Juan, César Jerez y otros. (1972). *El Salvador: año político 1971-1972*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- Ibisate, Francisco J. (1985). Características y resultados de la gestión económica. *ECA*, 439-440, 357-379.
- Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en Centroamérica y Panamá. (1979). *ECA*, 367, 363-377.
- Instituto de Investigaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. (1985). *Investigación. Desplazados y refugiados salvadoreños*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- Insulza, José Miguel, (1982). La crisis en Centroamérica y el Caribe y la seguridad de Estados Unidos. En CECADE y CIDE, *Centroamérica: crisis y política internacional*. México: Siglo XXI.
- Las elecciones y la unidad nacional: diez tesis críticas. (1982). *ECA*, 402, 233-238.
- Martín-Baró, Ignacio. (1981). La guerra civil en El Salvador. *ECA*, 387-388, 17-32.
- Martín-Baró, Ignacio. (1983). La polarización social en El Salvador. *ECA*, 412, 129-142.
- Montgomery, Tommie Sue. (1982). *Revolution in El Salvador. Origins and evolution*. Boulder, Co.: Westview Press.
- Partidos de derecha: derecha partida. (1984). *ECA*, 425, 123-130.
- Roedzni, Edward E. (1985). La situación de los derechos humanos en El Salvador: imágenes y realidades. *ECA*, 439-440, 401-416.
- Rosenthal, Gert. (1982). Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la psguerra. En CECADE y CIDE, *Centroamérica: crisis y política internacional*. México: Siglo XXI.
- Schwartz, Carole y Breny Cuenca. (1982). El camino militar electoral de la Administración Reagan para El Salvador versus la negociación política. En CECADE y CIDE, *Centroamérica: crisis y política internacional*. México Siglo XXI.
- Sebastián, Luis de. (1970). El Congreso de Reforma Agraria. *ECA*, 256-257, 51-56.
- Seis tareas urgentes para 1985. (1985). *ECA*, 435-436, 1-16.